Estados Unidos afronta sus elecciones más peligrosas
Argemino Barro. Nueva York

"Estoy aquí para impedir que un miembro yihadista de los Hermanos Musulmanes se convierta en senador de los Estados Unidos", declaró el presidente del país, Donald Trump, en referencia al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed. “Si Abdul y los demócratas ganan, abrirán las compuertas e invitarán a hordas de yihadistas a nuestras costas, creando una pesadilla de violencia y terror hasta el punto de que ni siquiera se podrá celebrar una Navidad”.

Durante el mismo mitin en Port Huron, en Michigan, Trump invitó a salir al estrado a David Beamer, padre de una de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Mike Rogers es estadounidense”, dijo Beamer, hablando del candidato republicano. “Abdul tiene un certificado de nacimiento. ¿Sabéis qué? Un certificado no te convierte en estadounidense", añadió, abrazando nociones supremacistas y torpedeando la decimocuarta enmienda de la Constitución.

Este tipo de acusaciones falsas y deshumanizadoras nos recuerdan, una vez más, que Estados Unidos está maduro para la violencia política. Aunque la opresión o la anarquía sean evitables, y quizás el país se acabe apartando, una vez más, del precipicio, las señales de peligro están a la vista y son de color rojo intenso.

“Uno de los factores de riesgo clave para la violencia política en las democracias es el uso de un lenguaje que plantea la situación en términos existenciales”, dice Jacob Ware, experto en terrorismo, profesor asociado de Georgetown y co-autor de *Dios, armas y sedición: terrorismo de extrema derecha en Estados Unidos* (Ediciones La Tormenta). “Esto se remonta a la teoría de los estudios sobre el terrorismo, la cual sostiene que el terrorismo surge cuando las personas sienten que no les queda ninguna otra opción. Por tanto, cuando líderes políticos de ambos partidos afirman cosas como: ‘Si perdemos estas elecciones, no habrá más elecciones’, o, como dijo Donald Trump: ‘Seré el último presidente republicano’, están condicionando a la gente a creer que, si pierden, su lugar en el mundo quedará aniquilado. Esto empuja a las personas a recurrir a medidas desesperadas, como la violencia”.

La sensación de mal augurio de Ware se puede plasmar en números. La iniciativa Chicago Project on Security and Threats (CPOST), de la Universidad de Chicago, mide con regularidad el clima de violencia política en función de tres variables: la propensión de los estadounidenses, tanto a la derecha como a la izquierda, de justificarla; cómo evoluciona el perfil de quienes cometen dicha violencia, y la frecuencia de las amenazas a los políticos de uno u otro partido.

Según la última encuesta, realizada a finales de agosto, el 25% de los adultos estadounidenses cree que “el uso de la fuerza está justificado para sacar a Donald Trump de su puesto”; por otro lado, un 16% cree que está justificado usar a las fuerzas

armadas contra las protestas anti-Trump. En total, por tanto, un 41% de los adultos en este país, 108 millones de personas, está predispuesto a aceptar el uso de la violencia con fines políticos. Una proporción cuatro veces superior a la registrada en noviembre de 2024, cuando un 10% abrigaba esta actitud.

“Empezamos a preguntar concretamente sobre la figura de Donald Trump en mayo de 2025”, aclara Keven Ruby, investigador senior del CPOST y director de investigación del proyecto dedicado a la propaganda militante. “A medida que nos acercamos a las elecciones de medio mandato, esos números, especialmente a la izquierda, han aumentado notablemente”.

Si bien la inmensa mayoría de estas 108 millones de personas no emprenderán ninguna acción, el hecho de que toleren que otras personas sí lo hagan es significativo. “Tolerar la violencia política no es lo mismo que practicarla", dice Ruby. Pero “ese nivel de respaldo público crea un espacio en el que los actores malintencionados sienten que no van a ser sancionados, o que incluso contarán con el apoyo de la comunidad para sus acciones; además, las barreras para amenazar a los funcionarios públicos son extremadamente bajas. Ahí están las redes sociales, sin regulación alguna, y, por supuesto, todo el mundo tiene acceso a ellas”.

El CPOST estudió las amenazas a 1.600 miembros del Congreso entre 2001 y 2024, y descubrió que, de 2016 a 2017, estas aumentaron un 600%. Desde entonces, su frecuencia ha seguido siendo alta. La Policía del Capitolio concluyó, en su último informe, que las amenazas a parlamentarios habían crecido por tercer año consecutivo en 2025. Solo el año pasado investigaron “14.938 declaraciones, comportamientos y comunicaciones preocupantes dirigidos contra miembros del Congreso, sus familias, su personal y el complejo del Capitolio”.

En ocasiones, algunas de estas miles de amenazas, que han obligado al Congreso a elevar la seguridad de sus miembros, se materializan.

En marzo de 2025, la sede del Partido Republicano en Nuevo México fue pasto de las llamas; en abril, un hombre prendió fuego a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, mientras este y su familia dormían en ella; en junio, la representante demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su marido fueron asesinados en su casa; en septiembre, el activista ultraconservador Charlie Kirk fue asesinado durante un evento al aire libre en Utah Valley University.

La violencia política no es, ni de lejos, un fenómeno nuevo en Estados Unidos, donde, por limitarnos al magnicidio, cuatro presidentes han sido asesinados y muchos otros objeto de atentados. Pero hay épocas más turbulentas que otras.

El especialista Jacob Ware enfatiza que la amenaza es real. “Si eres una figura pública, como un político, el nivel de amenaza es tan elevado que debes asumir, en

todo momento, que hay un asesino entre la multitud, y prepararte en consecuencia", dice. "Ya no es posible dar por sentado un cierto grado de seguridad al participar en nuestra democracia; se trata de un cambio propio de esta época".

Jacob Ware recuerda que Estados Unidos no celebra unas elecciones plenamente pacíficas desde 2014. La campaña de 2016 registró altercados en mítines y fuertes protestas después de los comicios; las elecciones de 2020 estuvieron marcadas por las manifestaciones y disturbios posteriores al asesinato de George Floyd, y luego por el intento de Trump de sabotear los resultados; en 2024, Trump fue víctima de dos intentos de asesinato, uno de los cuales erró por unos milímetros.

Con todo, este ciclo electoral tiene una novedad: según un estudio del CSIS, los atentados de extrema derecha han disminuido desde 2024. "Durante la última Administración Trump, vimos un dramático aumento de la violencia de extrema derecha que parecía indicar una sensación de empoderamiento", dice Ware. "Esta vez es diferente: hemos observado un descenso en la actividad y la violencia de extrema derecha. Se pueden plantear diversas hipótesis al respecto. Algunos miembros de los propios grupos han señalado que este descenso en la violencia se debe a que estos grupos comparten las prioridades de la Administración".

El pasado enero, Enrique Tarrio, exlíder de la formación extremista Proud Boys y uno de los condenados por "conspiración sediciosa" a raíz del asalto al Capitolio, reconoció que, con este gobierno, su actividad ultra ha perdido sentido. "Más o menos hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? No hay ninguna razón para protestar, joder", dijo Tarrio a The Atlantic.

Otro posible motivo de la menor actividad de estos grupos es que algunos de sus líderes o simpatizantes han sido integrados en el movimiento MAGA. La Administración Trump ha contratado a extremistas, conspiracionistas y criminales convictos. La agencia migratoria ICE hace campañas de reclutamiento en ferias de armas o en mítines de la organización del difunto Kirk, Turning Points USA. Y el Departamento de Seguridad Nacional usa frases e imágenes habituales del supremacismo blanco para defender su política migratoria. El propio Enrique Tarrio, indultado por el presidente, dirige la organización Latinos for Trump en Florida.

La aparente integración de la agenda extremista en el Gobierno federal, cuyas fuerzas paramilitares enmascaradas intimidan en las calles a quienes no tengan el aspecto correcto, va aparejada con otro fenómeno: la violencia política ya no es el monopolio de grupos de pirados, sino que se ha democratizado.

A raíz de un estudio pormenorizado de las casi 1.600 personas procesadas por el asalto al Capitolio, Keven Ruby, del CPOST, descubrió que estas se parecían "al votante medio de Donald Trump". La mayoría eran personas de edad madura (el 68% tenía más de 35 años en 2021), con una posición económica estable (el 41% eran

dueños de empresas u ostentaban empleos de cuello blanco), y muy pocos (solo un 11%) pertenecían a grupos extremistas.

“Esto es importante”, dice Ruby, “porque solíamos concebir la violencia de extrema derecha como algo marginal, como obra de neonazis y otros individuos extremadamente desempleados que apenas logran funcionar en la sociedad”. El perfil de extremista violento en la década anterior a 2021 era el de un joven (el 68% tenía menos de 35 años), parado y de categoría socioeconómica humilde.

“Así pues, los participantes en los sucesos del 6 de enero de 2021 son, en realidad, el reflejo de un movimiento más amplio en el que el apoyo a Donald Trump se tradujo en una disposición a recurrir a la violencia política en su nombre”, continúa Ruby. “Es un movimiento de masas. Sin duda, la base se ha ampliado”.

En la izquierda se ha dado un proceso similar: una democratización de la propensión a la violencia. “Las protestas por George Floyd no fueron obra de grupos marginales, sino que fueron masivas, realmente masivas”, explica Ruby. “Y la violencia que surgió de ellas tampoco provino, por lo general, de personas que estuvieran pasando por una mala situación; a menudo, quienes ejercieron la violencia contra la policía eran individuos blancos, con estudios universitarios”.

El abanico de posibilidades violentas es tan amplio que no tiene sentido hacer predicciones. Puede haber incidentes concretos el día de los comicios; el presidente, que ya trató de perpetuarse ilegalmente en el poder en 2021 y que continúa socavando la confianza en el proceso electoral, puede recurrir a numerosas artimañas para perturbar el voto: desde operaciones policiales al uso del Departamento de Justicia para tratar de bloquear certificaciones, como barrunta en Alaska. Esto puede causar protestas, y dichas protestas podrían ser reprimidas.

“Dado que el apoyo a la violencia política es considerable y, de hecho, va en aumento, nos preocupa, y mucho, que, ante una posible interferencia electoral o protestas, la situación pueda escalar”, dice Keven Ruby. “Ya hemos visto cómo, cuando la administración Trump envió al ICE y a la Patrulla Fronteriza a Chicago o a Minneapolis, su mera presencia en esos lugares generó un rechazo enorme. Por no mencionar las tácticas que emplearon, las cuales, como es evidente, no hicieron más que avivar la oposición a nivel local”.

La guerra de Irán va a ser otro factor a tener en cuenta. El envío de activos militares en la región, la evacuación de diplomáticos y las filtraciones que alertan sobre las posibles represalias iraníes, indican que los bombardeos se reanudarán después de las elecciones. La respuesta iraní podría incluir ataques a la infraestructura energética de toda la región. Si el cierre del estrecho de Ormuz ha sido dañino para la economía global, la destrucción de las refinerías, los oleoductos y las terminales de

almacenamiento podría ser catastrófico. También para la economía de EEUU, más dependiente del consumo de gasolina que sus pares europeos.

La retórica, las acciones y los sondeos señalan a algún tipo de precipicio. Siempre es posible alejarse, bajar el suflé, como se suele decir; pero las señales de un posible periodo de ingobernabilidad en EE. UU. están, ahora mismo, a la vista.